



PROPUESTAS PARA EL CAMPO LIBRE





Agua y regadío

3 claves

¿Por qué el agua es tan importante para el campo?

1

Porque determina si una explotación es viable o no:

El coste del agua y del riego puede marcar la diferencia entre seguir produciendo o abandonar el campo. En muchas zonas, el agricultor no solo paga el agua, sino también **cuotas fijas, mantenimiento e infraestructuras**, independientemente de cuánto produzca.

2

Porque el coste energético del riego es cada vez mayor:

Gran parte del riego requiere **bombeo y elevación de agua**, lo que implica un alto consumo eléctrico. En algunos casos, el **agua de elevación está gravada con un IVA del 21 %**, encareciendo artificialmente un insumo imprescindible para producir alimentos.

3

Porque el agricultor tiene poco margen de decisión:

Hoy, el agricultor suele tener **pocas alternativas reales** sobre cómo acceder y gestionar el agua. Esto genera dependencia, rigidez y una sensación de falta de control sobre un recurso del que depende directamente su trabajo y su supervivencia.

Por eso, el debate sobre el agua no es técnico ni ideológico: es un debate sobre **libertad y supervivencia** del campo

Libertad real para gestionar el agua:

Defendemos que el agricultor pueda **elegir libremente** cómo gestionar su riego: de forma individual, asociándose voluntariamente o a través de comunidades de regantes, **sin estructuras obligatorias ni dependencia forzada**.

Derechos de uso del agua claros y protegidos:

Queremos que los derechos de uso del agua sean **claros, estables y jurídicamente seguros**, de forma individual y también cuando se gestionen de forma colectiva, evitando cambios arbitrarios que generen incertidumbre y bloqueen la actividad agraria.

¿Qué son las comunidades de regantes?

Las **comunidades de regantes** son entidades creadas históricamente para gestionar el agua de forma colectiva, coordinar turnos de riego y mantener infraestructuras comunes.

En muchos lugares han cumplido una función importante y siguen siendo útiles. Sin embargo, **no deben convertirse en una estructura obligatoria ni en un intermediario impuesto**.

Cuando el agricultor no puede elegir, salir o gestionar el agua por otras vías, la comunidad deja de ser una solución y pasa a ser una **fuente de dependencia**, rigidez, costes fijos elevados y falta de alternativas.

En determinados contextos, la intervención del Estado ha reforzado a las comunidades de regantes **por encima del agricultor**, otorgándoles un papel quasi obligatorio en la gestión del agua. Esto ha reducido la libertad de elección y ha generado **dependencias estructurales** difíciles de revertir.

Silencio administrativo positivo en infraestructuras de riego:

Cuando un agricultor presenta un proyecto técnicamente viable y **la administración no responde en el plazo legal establecido**, el permiso **se considerará concedido automáticamente**, sin quedar bloqueado por la inacción administrativa.

El actual sistema, basado en retrasos, informes interminables y falta de respuesta, **paraliza inversiones, encarece costes y genera inseguridad jurídica**, afectando especialmente al pequeño agricultor, que no puede permitirse meses o incluso **años de espera**.

Reducción del coste del agua, especialmente de elevación:

Gran parte del regadío en España depende del **bombeo y la elevación de agua**, lo que implica un consumo eléctrico elevado y constante. En estas explotaciones, el coste energético puede representar **una parte muy significativa del precio final del agua**, incluso mayor que el propio coste del recurso.

En algunos casos, el **agua de elevación está gravada con un IVA del 21 %**, lo que supone que un agricultor pueda pagar cientos o miles de euros adicionales al año simplemente por poder regar. Por ejemplo, una explotación que destina 6.000 € anuales a energía para riego puede estar pagando **más de 1.200 € solo en IVA**, encareciendo artificialmente un insumo básico para producir alimentos.

Creemos que lo justo es eliminar estos **sobrecostes artificiales**, revisando el tratamiento fiscal del agua de elevación y reduciendo cargas que no tienen sentido en una actividad esencial como la producción agrícola.

Fin de la burocracia innecesaria:

La gestión del agua en el campo está hoy marcada por **duplicidades administrativas, trámites innecesarios y tiempos de espera desproporcionados**. En muchos casos, un agricultor debe presentar la **misma documentación** ante distintas administraciones para una sola actuación.

Es habitual que un expediente quede **meses paralizado** por la falta de un informe, una firma o una respuesta que nunca llega, obligando al agricultor a esperar sin plazos claros mientras la inversión se encarece o se pierde por completo. Estas demoras no solo afectan a grandes proyectos: **bloquean actuaciones básicas**.

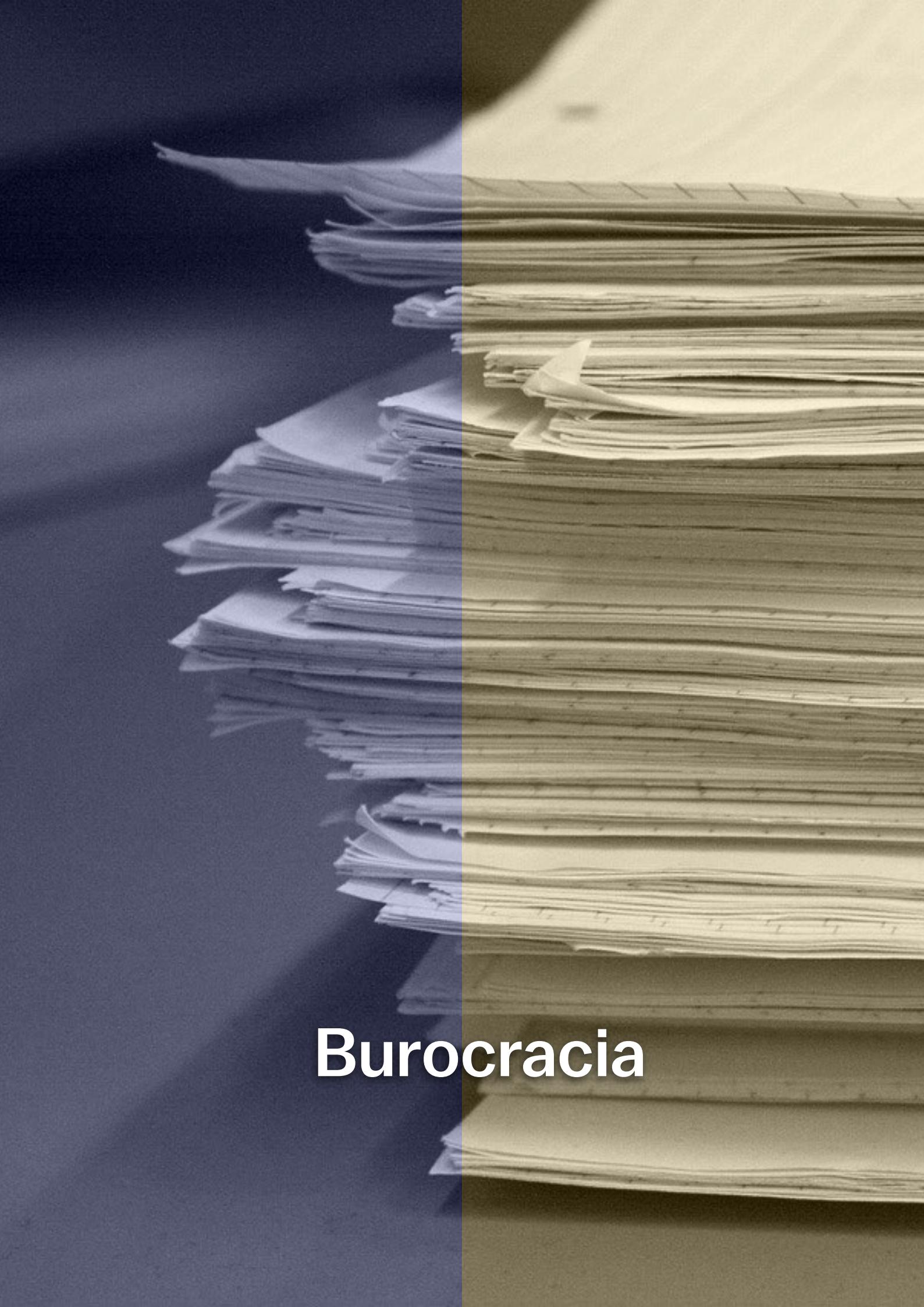
Es urgente simplificar los procedimientos administrativos y eliminar duplicidades entre administraciones. Una forma para conseguirlo, es sustituir licencias previas por mecanismos más ágiles, **como el método de declaración responsable**, de modo que el agricultor no tenga que pedir permiso a varias ventanillas para hacer lo mismo ni quede atrapado en trámites interminables para proyectos más básicos.

¿Qué es una declaración responsable?

Una **declaración responsable** es un mecanismo administrativo mediante el cual una persona comunica que cumple los requisitos legales necesarios para realizar una actuación, **sin necesidad de esperar una autorización previa**.

En lugar de pedir permiso y quedar bloqueado durante meses, el procedimiento se invierte: la actividad puede comenzar de forma inmediata, y la administración solo interviene posteriormente si existe un incumplimiento real.

Este sistema permite **agilizar trámites**, reducir costes y evitar bloqueos innecesarios, sustituyendo la desconfianza inicial hacia el agricultor por un principio de responsabilidad y buena fe.



Burocracia

3 claves

¿Por qué la burocracia está destruyendo el campo?

1

Porque cuesta más cumplir normas que producir:

Hoy, una parte creciente del trabajo en el campo no se hace con las manos, sino **delante de un ordenador o rellenando formularios**. Registros, declaraciones, plataformas distintas y requisitos cambiantes obligan al agricultor a dedicar horas y recursos a cumplir normas que no mejoran la producción ni la seguridad, pero sí encarecen y ralentizan su actividad.

2

Porque un error administrativo se castiga como un delito:

En muchos casos, **un fallo de papeleo**, una fecha mal puesta o un trámite incompleto puede acabar en sanciones económicas importantes, aunque no exista daño real ni mala fe. Este enfoque convierte al agricultor en un sospechoso permanente y **castiga más el error formal que el fraude real**, afectando especialmente a pequeñas explotaciones sin medios administrativos.

3

Porque la administración desconfía por defecto del agricultor:

El sistema actual parte de la idea de que el agricultor debe demostrar constantemente que cumple, **antes incluso de poder trabajar**. Permisos previos, controles repetidos y trámites interminables reflejan una desconfianza estructural que bloquea inversiones, genera inseguridad y desincentiva seguir en el campo.

Simplificación administrativa y sin obligación digital:

En la actualidad, el agricultor debe cumplir con múltiples trámites y registros repartidos entre distintas administraciones y plataformas, muchas veces con **información repetida** y requisitos poco claros. Esta fragmentación administrativa consume tiempo, genera errores y convierte la gestión diaria en una carga que nada tiene que ver con producir alimentos.

Implantaremos una **ventanilla única agraria** que unifique trámites y comunicaciones, y pondremos fin a la **obligación del cuaderno de campo digital** como requisito impuesto. La digitalización debe ser una herramienta útil y voluntaria, no una condición obligatoria que sustituya el trabajo en el campo por trabajo administrativo.

¿Qué es el cuaderno digital?

El **cuaderno de campo digital** es un registro obligatorio en el que el agricultor debe anotar su actividad agraria: cultivos, tratamientos, fechas, productos utilizados y otros datos técnicos. Su finalidad teórica es mejorar el control y la trazabilidad de la actividad en el campo.

En la práctica, este sistema obliga a introducir información de forma constante en plataformas digitales, muchas veces distintas según la administración o el trámite, repitiendo datos que ya se han comunicado por otras vías.

Además, la digitalización ha permitido **cruces automáticos de información** que pueden activar alertas o expedientes sancionadores ante errores formales, incoherencias o retrasos, **sin una evaluación previa del caso concreto ni del daño real**. Esto convierte una herramienta administrativa en una fuente de inseguridad jurídica.



Agricultura y comercio

3 claves

¿Por qué es tan difícil producir y vender y vivir del medio rural en la actualidad?

1

Porque en ocasiones producir no es rentable

Producir alimentos en el campo es cada vez menos rentable para quien trabaja la tierra. Los costes de producción —energía, insumos, impuestos y cumplimiento normativo— no han dejado de aumentar, mientras que el agricultor tiene poco margen real para fijar precios o adaptar su actividad. El resultado es que muchos producen mucho y ganan poco, quedando atrapados entre costes crecientes y decisiones económicas tomadas lejos de su realidad.

2

Porque la venta directa esta llena de trabas:

Vender directamente al consumidor, a comercios locales o desde la propia finca debería ser una opción natural, pero hoy está rodeada de **requisitos pensados para grandes operadores**. Licencias, registros, normativas y exigencias desproporcionadas convierten una actividad sencilla en un proceso complejo, empujando al agricultor a depender de intermediarios y reduciendo su margen de beneficio.

3

Porque la vivienda en el campo es una carrera de obstáculos

Las trabas para construir o rehabilitar vivienda en suelo rústico, la rigidez urbanística y la acumulación de permisos convierten un proyecto de vida en un laberinto administrativo. No se puede pedir relevo generacional ni vida rural activa si luego **vivir donde se trabaja se hace prácticamente imposible**.

Agricultura y comercio

Libertad de precios y contratos:

El agricultor debe poder **acordar libremente el precio de sus productos**, sin intervenciones directas o encubiertas que distorsionen el mercado y reduzcan su margen. Las relaciones entre productor, intermediario y comprador deben basarse en acuerdos voluntarios, no en precios impuestos que no reflejan los costes reales de producción.

Defendemos un marco en el que el agricultor pueda **negociar, adaptar y decidir**, fomentando la competencia y la transparencia. Sin libertad de precios no hay rentabilidad, y sin rentabilidad no hay futuro para el campo.

Venta directa desde la finca:

En la actualidad, vender directamente al consumidor o a comercios locales se ha vuelto innecesariamente complejo. Normativas, registros y licencias **diseñadas para grandes cadenas de distribución** se aplican de forma general, obligando a cumplir con requisitos que poco tienen que ver con la realidad de una venta directa o de proximidad.

Creemos que es urgente facilitar la **venta directa desde la finca** y los canales cortos de comercialización, adaptando la normativa para que esta opción sea viable sin intermediación forzada ni cargas administrativas desproporcionadas. Vender directamente debe ser una alternativa normal y accesible, no una excepción.

Vivienda vinculada a la actividad agraria:

No se puede pedir que la gente se quede en el campo si **vivir donde se trabaja está lleno de obstáculos legales**. Hoy, algo tan básico como rehabilitar una vivienda existente, ampliar una casa familiar o construir una vivienda junto a la explotación puede convertirse en un proceso largo y complejo, incluso cuando la actividad agraria es real y continuada.

Defendemos que **vivir junto al lugar de trabajo sea una opción normal**, no una excepción sometida a permisos desproporcionados.

